7. SECRETARÍA TÉCNICA

El artículo 13.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que la Secretaría Técnica forma parte de la Fiscalía General del Estado junto con la Inspección Fiscal, la Unidad de Apoyo y los Fiscales de Sala que se determinen en plantilla.

El mismo precepto en su apartado 3.º determina cuál ha de ser la composición de la Secretaría Técnica, atribuyendo a esta Unidad la función de realizar los «trabajos preparatorios que se les encomienden en aquellas materias en las que corresponda a la Junta de Fiscales de Sala asistir al Fiscal General del Estado, así como cuantos otros estudios, investigaciones e informes estime éste procedente» y de colaborar en la «planificación de la formación de los miembros de la carrera fiscal cuya competencia corresponde al Centro de Estudios Jurídicos» asignándole también la labor de asumir las «funciones que las Leyes atribuyan al Ministerio Fiscal en materia de cooperación judicial internacional, en el marco de las directrices de política exterior emanadas del Gobierno».

La Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, en el ejercicio de estas funciones básicas que le son otorgadas estatutariamente, ha realizado durante el año 2017 una labor que puede ser sintetizada en los apartados que a continuación se desarrollan:

7.1 Circulares, Consultas e Instrucciones

Durante el ejercicio correspondiente al año 2017, se han elaborado los borradores de los siguientes documentos:

- *Circular 1/2017, sobre la interpretación del art. 183 quater del Código Penal*

Obedece esta circular a la necesidad de fijar un criterio interpretativo acorde con la nueva regulación, conforme a la cual el consentimiento libre del menor de dieciséis años excluirá la responsabilidad por posibles delitos de abusos y agresión sexual cometidos sobre los menores de esta edad, y cuando tal consentimiento tendrá la relevancia suficiente para excluir una posible responsabilidad penal.

Se considera que el fundamento de la excepción contemplada en el art. 183 quater CP radica en evitar interpretaciones estrictas que castiguen las relaciones sexuales consentidas entre adolescentes o personas jóvenes entre las que no existan diferencias sustanciales en cuanto edad y madurez. Dicha situación excluye la noción de abuso. Así, se estima que el Legislador, para conferir eficacia al consentimiento del menor de 16 años, ha optado por un criterio mixto fundado en dos parámetros: uno cronológico (edad similar) y otro biopsicosocial (semejante grado de desarrollo o madurez).

El art. 183 quater no define franjas concretas de edad. Es posible, no obstante, fijar marcos de protección según la víctima sea impúber (en todo caso), haya alcanzado la pubertad y no sea mayor de 13 años (la exención se limitaría generalmente a autores menores de 18 años), y menores de 14 y 15 años (cuyos contactos sexuales podrían abarcar a sus iguales jóvenes). Dentro de la franja de edad de los adultos jóvenes, debe precisarse entre la comprendida entre 18 y menos de 21 y la situada entre 21 y 24 años inclusive. En la última subdivisión, solo muy excepcionalmente, podrá contemplarse la exclusión o la atenuación habida cuenta de la importante diferencia de edad y el alejamiento de las franjas cronológicas que, ordinariamente, resultan del derecho comparado (entre 2 y 5 años). Se recalca, en cualquier caso, que estos criterios deben considerarse orientadores.

La capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de los actos no va ligada, de manera uniforme, a la edad cronológica. Las diferencias en este aspecto deben constatar caso por caso y, sobre todo atender al hecho de que, cuanto mayor sea la diferencia de edad, mayor necesidad habrá de acreditar la semejanza en cuanto a desarrollo o madurez.

En lo que atañe a la LORPM, siguen manteniendo su vigencia, *mutatis mutandis*, los pronunciamientos de la Circular 9/2011, de 16 de noviembre. Debiéndose buscar la respuesta individualizada en cada caso, que puede ser el archivo (art. 16 LORPM), cuando por las circunstancias y proximidad de edad se estime que los hechos no afectan ni a la libertad ni a la indemnidad sexual y quedan al margen del ámbito de protección de la norma penal.

Cabe la posibilidad de construir una atenuante por analogía en tanto que la concurrencia parcial puede excluir la idea de abuso en forma relativa. Deberá atenderse al caso concreto y la situación deberá abarcar necesariamente la proximidad por edad dispuesta en el precepto, siendo graduable el grado de desarrollo o madurez al objeto de establecer el alcance de la atenuación. Atenuante analógica que podrá tener la consideración de muy cualificada, para los supuestos en los que sin ser admisible la exoneración total, atendidas las circunstancias concurrentes, la relación entre el autor y el menor sea muy cercana a la simetría en el grado de desarrollo y madurez. La exención no podrá aplicarse a acciones típicas en las que concurra violencia, intimidación o prevalimiento.

En relación con el delito del art. 183 ter, apartado primero (*grooming*), podrá teóricamente apreciarse la exención en relación con el tipo básico, pero no respecto del agravado, que exige la concurrencia de violencia, intimidación o engaño. No podrá apreciarse esta cláusula en el delito del apartado segundo del art. 183 ter (*sexting*), por ser incompatible el «consentimiento libre» que se exige en el art. 183 quater con el «embaucamiento» propio de este tipo.

– *Circular 2/2017, sobre el ingreso no voluntario urgente por razón de trastorno psíquico en centros residenciales para personas mayores*

Responde esta circular a la necesidad de fijar unas pautas de actuación en este tipo de intervenciones judiciales, en tanto que es una cuestión examinada recientemente por el Tribunal Constitucional, así como a despejar las dudas de interpretación observadas en la práctica respecto a la Instrucción 4/2016, de 22 de diciembre, *sobre las funciones del Fiscal delegado de la especialidad civil y de protección jurídica de las personas con discapacidad de las CC.AA.*, y al importante volumen de trabajo que generan en Juzgados y Fiscalías.

Se exhorta a los Sres. Fiscales para velar porque se respete la garantía judicial y el proceso contradictorio en los internamientos involuntarios por razón de trastorno psíquico en centros residenciales para

mayores dependientes, indicando que los internamientos urgentes que no cumplan las exigencias materiales y procesales no pueden ser objeto de «regularización». No obstante, tal imposibilidad no implica que no pueda reiterarse la petición (siempre que el afectado se encuentre en libertad) ni que no existan otros títulos que permitan mantener la permanencia en el centro residencial, en tales casos se ha de valorar especialmente la situación personal del afectado a la hora de pronunciarse sobre el cese efectivo de la estancia en el establecimiento.

En cuanto a la hora de solicitar o informar sobre la adopción de medidas de protección, se deberá tener presente especialmente la necesidad de evitar lesiones al derecho a la vida y a la integridad física de la persona afectada, tomando en consideración la doctrina del TEDH sobre el art. 2 CEDH y partiendo de que el abandono de una persona con discapacidad necesitada de protección puede ser constitutivo de delito del art. 229 CP. También se deberá valorar especialmente el principio de libertad de elección y el derecho de protección social, dentro del marco de los arts. 49, 50 y 14 CE, conformidad con lo dispuesto en la LGDPD.

Para los casos en los que las personas mayores hubieran iniciado el ingreso en el centro residencial de forma voluntaria, dicho establecimiento tiene consideración de domicilio a efectos legales. La situación de demencia sobrevenida transforma el internamiento en involuntario, debiendo ser objeto de control judicial, es por ello que los Sres. Fiscales, en sus visitas de inspección, comprobarán que se cumpla esta garantía.

El internamiento involuntario de personas mayores por razón de trastorno psíquico puede realizarse en establecimientos sanitarios, asistenciales o mixtos. Cada sistema tiene sus propios criterios de definición de lo que constituyen situaciones de urgencia por lo que la interpretación del término «urgente», se ceñirán al contexto en que se realiza la intervención, rechazando interpretaciones indebidamente restrictivas.

La obligación de informar de los motivos de la detención es exigencia de los arts. 5.2 CEDH, 9.2 PIDCP y 17.3 CE, constituyendo deber del órgano judicial realizarla, algo que los Sres. Fiscales deberán comprobar en todos los procedimientos de esta índole. Por otra parte, la información de derechos comportará, entre otros extremos, los concernientes a la designación de Letrado y Procurador.

En los casos de internamiento de personas que presenten capacidad modificada judicialmente o por modificar y se encuentren en posible situación de especial vulnerabilidad, debe valorarse, en todo caso, si son procedentes medidas de protección jurídica en atención a

su situación personal, debiendo en tales casos instarse por los Sres. Fiscales la actuación de los órganos judiciales, oponiéndose a toda interpretación que demore u obstaculice la intervención de oficio.

Toda medida de protección jurídica que comporte privación de libertad deberá ser acordada con las garantías de los arts. 763 LEC y 5.1.e) CEDH, medida que podrá ser acordada *dentro de* cualquier proceso civil o penal, debiéndose entender que ha de ser en procedimiento contradictorio.

El incumplimiento de las garantías del internamiento urgente adoptado por los responsables de los centros dará lugar a la declaración de vulneración del derecho, a la imposibilidad de regularización de tal período de privación de libertad y a la posible exigencia de responsabilidades, pero en ningún caso podrá suponer peligro o perjuicio para las personas cuyo derecho se ha visto vulnerado, debiéndose oponer los Sres. Fiscales a cualquier interpretación que obstaculice la intervención judicial inmediata en evitación de peligros o perjuicios a las personas afectadas.

En cuanto al procedimiento en cuyo seno pueden adoptarse medidas de protección *ex officio*, se entiende que, por lo general, se acordarán en el propio procedimiento del art. 763 inicialmente abierto (considerando que las medidas de protección ex arts. 216 y 158 CC constituyen un título legítimo distinto al derivado del internamiento por razón de urgencia acordado por los responsables del centro) o en el de incapacidad (bien como medida cautelar o bien en sentencia definitiva), pudiendo solicitarse por el Fiscal la intervención judicial en cualquiera de ellos.

Se considera que la intervención judicial no admite demoras, por lo que se deberá promover ante los órganos jurisdiccionales la efectiva aplicación de este principio de manera inmediata.

La necesidad del control judicial de la privación de libertad no implica necesariamente la modificación judicial de la capacidad. Esta opción sólo puede justificarse, conforme a los criterios internacionales de necesidad y proporcionalidad, cuando sean exigibles medidas de apoyo que excedan del acto puntual y precisen de un contexto de protección estable, debiendo desecharse toda interpretación formalista que no respete lo anterior, por constituir práctica contraria a la CDPD.

En los casos en que se estime que, pese a concurrir causa del art. 200 CC, no existe motivo para interponer la demanda, por resultar innecesaria o desproporcionada, y se haya acordado el internamiento en fase cautelar previa (art. 762 LEC), los Sres. Fiscales –tras dictar el correspondiente decreto en las diligencias preprocesales– interesarán del Juz-

gado el cese de la medida cautelar y, en su caso, el mantenimiento de la situación de internamiento como medida autónoma de protección jurídica, conforme a los arts. 158, 216, 303 y 304 CC, cuya vigencia puede prolongarse «mientras se mantenga la situación de guarda de hecho».

- *Circular 3/2017, sobre la reforma del Código Penal operada por la LO 1/2015 de 30 de marzo en relación con los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y los delitos de daños informáticos* (*)

La reforma llevada a efecto en el Código Penal por la LO 1/2015, de 30 de marzo, afecta de forma importante a la regulación hasta ahora existente en materia de delitos de descubrimiento y revelación de secretos y de daños informáticos. Los primeros encuadrados en el capítulo I del título X del libro II del CP, dedicado a «Los delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio», y los segundos en el capítulo IX del título XIII del libro II del CP, dedicado a los «Delitos contra el Patrimonio y contra el Orden Socioeconómico».

Se indica qué se ha de entender por datos personales, en tanto que en el art. 197.4.º b) se incorpora una nueva circunstancia agravatoria cuando los hechos sancionados en los párrafos 1.º y 2.º del mismo art. se lleven a cabo mediante la utilización no autorizada de datos personales de la víctima. A estos efectos, se ha de entender por datos personales no solo los datos de identidad oficial, en sentido estricto, sino cualesquiera otros, propios de una persona o utilizados por ella, que le identifiquen o hagan posible su identificación frente a terceros tanto en un entorno físico como virtual. Tienen tal consideración no solo el nombre y apellidos, sino también, entre otros, los números de identificación personal como el correspondiente al DNI, el de afiliación a la Seguridad Social o a cualquier institución u organismo público o privado, el número de teléfono asociado a un concreto titular, la dirección postal, el apartado de correos, la dirección de correo electrónico, la dirección IP, la contraseña/usuario de carácter personal, la matrícula del propio vehículo, las imágenes de una persona obtenidas por videovigilancia, los datos biométricos y datos de ADN, los seudónimos y en general cualquier dato identificativo que el afectado utilice habitualmente y por el que sea conocido.

El art. 197.7 CP recoge una nueva figura delictiva que sanciona penalmente la divulgación a terceros de imágenes o grabaciones

* Este borrador ha sido elaborado por la Unidad de Criminalidad Informática.

audiovisuales de una persona que, aun obtenidas con su consentimiento, se difunden, revelan o ceden sin su anuencia, lesionando gravemente su intimidad personal, entendiéndose por tales tanto los contenidos perceptibles únicamente por la vista, como los que se perciben conjuntamente por el oído y la vista y también aquellos otros que, aun no mediando imágenes, pueden captarse por el sentido auditivo. Este precepto es aplicable cuando la imagen o grabación, posteriormente difundida, se haya tomado en un ámbito espacial reservado, circunstancia ésta que el tipo penal concreta en la exigencia de que se haya obtenido en un domicilio o en un lugar fuera del alcance de la mirada de terceros. Por tal habrá de entenderse cualquier lugar cerrado o también un lugar al aire libre si se acredita que reúne garantías suficientes de privacidad para asegurar que la captación de las escenas/imágenes se efectuó en un contexto de estricta intimidad sustraído a la percepción de terceros ajenos a ellas.

Se ha de entender que no hay autorización del afectado cuando ésta no conste, a la que han de equipararse los supuestos de falta de conocimiento de la ulterior cesión o distribución por parte del afectado. Si fueran varias las personas que aparecen en las imágenes la difusión solo resultará atípica si hubieran accedido a la difusión todas y cada una de ellas.

Tratándose de un delito especial propio, incurre en responsabilidad únicamente quien, habiendo obtenido con anuencia de la víctima la imagen o grabación, inicia la cadena de difusión consciente de que carece de autorización para ello del propio afectado y por tanto de que su conducta lesiona la intimidad de la víctima. Ello sin perjuicio de la responsabilidad exigible en los supuestos de coparticipación criminal por coautoría, cooperación necesaria, inducción o complicidad, si concurren los presupuestos previstos en los artículos 28 y 29 CP. Al margen de dichos supuestos, quien, sin haber participado en la obtención de la imagen o grabación, la trasmite posteriormente a terceros a sabiendas de su contenido y de la falta de autorización de la víctima *–extranei–* podría incurrir en un delito contra la integridad moral del artículo 173.1 CP, si concurren los requisitos de dicho tipo penal y concretamente cuando dicha difusión menoscabe gravemente la integridad moral de la persona afectada.

El autor del delito del art. 197.7 también puede incurrir también en un delito contra la integridad moral del art. 173.1 del CP cuando la difusión in consentida lesione no solo la intimidad del afectado sino también, por la naturaleza de las imágenes difundidas, afecte gravemente a la integridad moral de la víctima. En estos supuestos será de

apreciación un concurso ideal entre ambos delitos a penar de conformidad con el artículo 77.2 del mismo texto legal.

Cuando las imágenes obtenidas y posteriormente difundidas se refieran a un menor o a una persona con discapacidad y merezcan la consideración de material pornográfico, tal y como se define en el art. 189 del CP, se plantea una situación de concurso entre la figura prevista en el 197.7 y los preceptos correspondientes a los delitos de pornografía infantil. En estos supuestos se produciría un concurso ideal entre el delito que se examina, art. 197.7, párrafo 2.º y el art. 189.1.º b) ambos del CP, a penar de conformidad con el art. 77.2 del mismo texto legal dado que la acción ilícita, no solamente lesiona la intimidad del afectado cuya imagen se difunde sin su autorización, sino que pone también en peligro la indemnidad sexual de los menores, genéricamente considerados, como bien jurídico protegido en los delitos de pornografía infantil.

Respecto al delito de acceso ilegal a sistemas informáticos (art. 197 bis 1.º) se señala que su reubicación sistemática deja constancia de que el bien jurídico protegido en el mismo, no es directamente la intimidad personal, sino más bien la seguridad de los sistemas de información en cuanto medida de protección del ámbito de privacidad reservado a la posibilidad de conocimiento público. El delito se consuma por el mero hecho de acceder –o facilitar a otro el acceso– a un sistema informático o a parte del mismo aun cuando la acción no vaya seguida del apoderamiento de datos, informaciones o documentos ajenos. Por medida de seguridad ha de entenderse cualquiera que se haya establecido con la finalidad de impedir el acceso al sistema, con independencia de que la misma sea más o menos sólida, compleja o robusta y también de que haya sido establecida por el administrador, el usuario, o por el instalador del sistema siempre que se mantenga operativa como tal medida de seguridad por quien está legitimado para evitar el acceso.

Se considera que en la práctica será frecuente la concurrencia de este tipo, acceso ilegal a sistemas, con cualquiera de las conductas previstas en el artículo 197 n.º 1 y 2. En estos casos, en términos generales, será de apreciar un concurso medial del artículo 77 CP, al igual que en los supuestos en que el acceso ilegal tuviera por objeto el descubrimiento de secretos de empresa (art 278 CP) o el descubrimiento de secretos oficiales (art. 598 y ss CP). Ello no obsta a que en casos concretos, en los que no sea posible el acceso a la información íntima o a los datos personales por medio distinto que la vulneración de medidas de seguridad del sistema, pudiera considerarse la posibilidad de apreciar una progresión delictiva que llevaría a considerar el con-

curso de normas sancionable por la vía del artículo 8.3 CP. En todo caso, cuando para sortear las medidas de seguridad fuera preciso utilizar datos de carácter personal de la víctima, la apreciación del art. 197 bis 1.º junto con el artículo 197.4. b) supondría una infracción del principio *non bis in idem*, debiendo aplicarse en estos casos este último precepto, por mor del principio de especialidad establecido en el artículo 8.1 del CP.

En cuanto al delito de interceptación ilegal de datos informáticos (art 197 bis 2.º) se entiende que el objeto de protección en este tipo penal es doble. En primer término, lo son los datos informáticos objeto de cualquier tipo de transmisión –salvo las tengan el carácter de comunicación personal cuya interceptación se sanciona en el art 197.1.º– que se lleve a efecto, incluso sin necesidad de intervención humana, entre los distintos dispositivos de un sistema o entre dos o más sistemas y en forma no pública, es decir en condiciones tales que dichos datos queden excluidos del conocimiento de terceros. En segundo término, se protegen también los datos informáticos de un sistema que son susceptibles de obtenerse a partir de las emisiones electromagnéticas del mismo. En uno y otro caso, para que la conducta sea delictiva han de concurrir dos requisitos: que quien efectúa la interceptación no esté autorizado para ello y que la misma se realice utilizando como medio artificios o instrumentos técnicos, debiendo entenderse por tales cualesquiera herramientas o mecanismos que hagan posible este objetivo, aunque no estén específicamente destinados a ello.

La ubicación de este delito en el nuevo art. 197 bis.2.º, junto al acceso ilegal a sistemas informáticos, es coherente con la voluntad del legislador de separar la tipificación y sanción de las conductas que tutelan la privacidad protegiendo la seguridad de los sistemas de aquellas otras en las que el bien jurídico protegido es directamente la intimidad de las personas. En los supuestos de concurrencia entre la interceptación ilegal del artículo 197 bis.2.º y los delitos del artículo 197.1.º, el criterio a aplicar será el del concurso de normas a resolver conforme al principio de absorción dado que uno de los comportamientos típicos que reseña el último precepto citado es el de interceptar las comunicaciones o utilizar artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción de imágenes, sonidos o cualquier otra señal de comunicación, por lo que entraría en juego el artículo 8.3.º CP a cuyo tenor el precepto legal más amplio o complejo absorberá a los que castiguen las infracciones consumidas en aquel, siendo de aplicación por tanto el artículo 197.1.º. Ahora bien, en el supuesto de que la interceptación ilegal (art 197 bis.2.º) concorra con alguna de las conductas ilícitas contempladas en el art. 197.2.º habrá

de apreciarse un concurso medial, del art 77 CP por las mismas razones y con las salvedades expuestas a propósito de la concurrencia del artículo 197 bis.1.º con esta misma conducta.

En cuanto al delito de abuso de dispositivos (art. 197 ter) se indica que la utilización de los verbos producir, adquirir para el uso, importar o de cualquier modo facilitar a tercero en la definición de la conducta típica lleva a entender incluidas en la misma tanto la elaboración para uso propio, o para distribución a terceros, como la importación, la adquisición y en consecuencia la ulterior posesión –aunque el precepto no lo indique expresamente– bien sea para el propio uso o para la distribución o entrega a otro u otros y en general cualquier forma de puesta a disposición de terceros de cualquiera de las herramientas o instrumentos que se relacionan en los apartados a) y b) del mismo precepto. Dichos instrumentos y herramientas pueden ser: programas informáticos y/o contraseñas, códigos de acceso o datos similares que hagan posible el acceso a un sistema. Respecto a los primeros la exigencia legal de que se trate de programas concebidos o adaptados principalmente para cometer determinados delitos remite al software malicioso o *malware* diseñado para infiltrarse y/o obtener información (programas espía) en un dispositivo o un sistema de información sin el consentimiento de su propietario, quedando excluidos cualquier otro tipo de programas que no reúnan dicha característica, aunque puedan ocasionalmente servir para esa misma finalidad, circunstancia cuya determinación hará necesario generalmente un informe pericial. Por su parte, la referencia a contraseñas, códigos o datos similares, concierne a medidas de seguridad instaladas para evitar la intromisión en archivos, partes de un sistema o en el sistema mismo por quien no se encuentra habilitado para ello. No estamos por tanto ante herramientas elaboradas específicamente para hacer posible la intromisión ilegítima en un sistema sino ante la irregular disponibilidad de las legítimamente creadas y utilizadas para impedir dicha intromisión.

La posibilidad de actuar penalmente ante dichos comportamientos se encuentra acotada por dos elementos, la falta de autorización para la elaboración, importación, adquisición o facilitación a terceros de esos instrumentos o herramientas y la exigencia de que dichas acciones estén orientadas a facilitar la comisión de alguno de los delitos a que se refieren los artículos 197, 1.º y 2.º y 197 bis CP. En consecuencia, es imprescindible que quien así actúa no cuente con autorización, bien sea otorgada legalmente bien porque se le haya encomendado dicha responsabilidad por quien tenga capacidad para ello en el marco concreto de la actividad de que se trate. Pero además ha de actuarse con la finalidad específica de facilitar la comisión de uno de los delitos men-

cionados, circunstancia que habrá de acreditarse en cada supuesto, atendiendo a los elementos, pruebas o indicios existentes. Cuando quien haya producido, importado o adquirido estas herramientas o instrumentos sea el mismo que posteriormente comete el delito concreto, bien sea del art. 197 apartados 1 y 2) o del art. 197 bis, utilizando esos mismos medios fabricados, adquiridos o poseídos a dicho fin, habrá de entenderse que se produce un concurso de normas, a resolver de acuerdo con el criterio de absorción previsto en el art. 8.3 del CP.

La LO 1/2015 traslada al art. 197 quáter la agravación derivada de la comisión del hecho en el seno de una organización o grupo criminal, anteriormente sancionada en el art. 197.8, haciéndola extensiva a todos los delitos descritos en capítulo I del título X del libro II del CP. En estas ocasiones, cuando el sujeto activo de cualquiera de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos sea, al tiempo, integrante y/o dirigente del grupo u organización participante en la acción ilícita se produce un concurso de normas con los arts. 570 bis o 570 ter del CP. Ha de recordarse, por tanto, el criterio establecido en la Circular 2/2011 que, en aplicación de lo establecido en art. 570 quáter *in fine*, remite en estos casos al art. 8.4 CP y, por tanto, establece que en tales supuestos los Sres. Fiscales cuidarán de aplicar, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 570 quáter CP, conforme al criterio de alternatividad, un concurso de delitos entre el art. 570 bis o el art. 570 ter, en su caso y el tipo correspondiente al delito específicamente cometido con todas sus circunstancias si bien prescindiendo de la agravación específica de organización, cuando la pena así aplicada sea superior a la que prevé el subtipo agravado.

Se indica que, dada la ubicación de los nuevos tipos penales, les será de aplicación la previsión del art. 201 CP por lo que será necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, sin perjuicio de las facultades asignadas al Ministerio Fiscal cuando se trate de personas menores de edad o en situación de discapacidad. Exigencia que se estima puede dificultar la aplicación de estos preceptos, especialmente del art. 197 ter, dado que tipifica actos preparatorios del ataque informático en los que no es necesario que la conducta ejecutada haya llegado a agraviar a personas determinadas. No obstante, a estos efectos, ha de tenerse en cuenta la previsión del art. 201.2 que hace innecesaria dicha denuncia si el delito afecta a intereses generales o a una pluralidad de personas. Esta circunstancia se valorará en atención al número o características del sistema o sistemas informáticos objeto de acceso o interceptación ilegal y, en los supuestos del art. 197 ter, cuando la concreción en el curso de la investigación del fin a que se destinaban las herramientas o instrumentos

permita dicha conclusión, por ejemplo cuando el objeto de la acción fuera el espionaje informático de organismos e instituciones del Estado o cuando lo que se pretenda sea la obtención masiva de credenciales bancarias o acciones de similar naturaleza planificadas para afectar a muchas personas.

En referencia a la circunstancia que agrava la pena prevista para el delito de daños informáticos (art. 264.2.2.º CP), la conjunción disyuntiva que enlaza las circunstancias de ocasionar daños de especial gravedad o afectar a un número elevado de sistemas ha de interpretarse en el sentido de que no es necesario que ambas concurren conjuntamente sino que es posible aplicar la agravación aun cuando solo sea apreciable una u otra de dichas circunstancias. La interpretación de los conceptos de gravedad y especial gravedad del daño causado, por su carácter indeterminado y su dificultad de concreción –dada la naturaleza inmaterial de los elementos afectados – hace necesaria una labor exegética que deberá llevarse a efecto a partir de la doctrina jurisprudencial sobre supuestos concretos. Sin perjuicio de ello, y de conformidad con los parámetros fijados por la Directiva 40/2013/UE, habrían de considerarse graves, y por tanto encuadrables por su resultado en el art. 264.1 CP, todas aquellas acciones ilícitas que tuvieran trascendencia significativa o generaran consecuencias apreciables en datos, programas informáticos o documentos electrónicos o en los intereses en juego, quedando la aplicación del subtipo que nos ocupa para los supuestos en que los efectos del delito fueran especialmente relevantes y no se hicieran merecedores, por su especial intensidad, de la calificación de extrema gravedad. La circunstancia prevista en el inciso segundo del art. 264.2.2.º CP habrá de aplicarse específicamente en los supuestos en los que se encuentre afectado un número tal de sistemas de información que pueda considerarse la existencia de un ataque informático masivo en el sentido a que se refiere el cuerpo de esta Circular.

En cuanto a la circunstancia del art. 264.2.3.ª será aplicable cuando el ataque informático a datos, programas o documentos electrónicos afecte gravemente a la prestación ordinaria de servicios esenciales o a la provisión de bienes de primera necesidad. A estos efectos se entienden por servicios esenciales aquellas actividades que sirven para el mantenimiento de las funciones sociales básicas de la comunidad, como la salud, la seguridad, la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas y el normal funcionamiento de las Instituciones del Estado. En cuanto a los bienes de primera necesidad deben considerarse como tales los alimentos, medicamentos y otros productos de consumo imprescindible para la subsistencia y salud de las personas.

La agravación del art. 264.2.4.^a operará con la simple afección al sistema informático de una infraestructura crítica, definida como tal en el CP, sin que sea necesario para ello que los efectos en los datos o programas informáticos o en el propio sistema sea de carácter grave. En cuanto a la creación de una situación de peligro para la seguridad del Estado, de la Unión Europea o de un Estado Miembro de la Unión Europea, la agravación solo será apreciable si el riesgo creado ha sido efectivamente grave. Por otra parte, la agravación específica prevista en el apartado 3.º del art. 264 establece, de forma preceptiva, la imposición de las penas en su mitad superior, tanto respecto al tipo básico como en los subtipos agravados. La circunstancia se integra por la utilización no autorizada de datos personales de cualquier otra persona –que hay que entender como realmente existente– como medio para facilitar el acceso al sistema objeto de ataque o para conseguir la confianza de un tercero que, a su vez, favorezca o facilite la causación de daños en los elementos del sistema. Respecto al alcance del concepto datos personales, se deberá tomar en consideración el análisis efectuado a propósito de la aplicación de la circunstancia similar en los delitos de descubrimiento y revelación de secretos.

Todas las conductas ilícitas de los arts. 197 bis, 197 ter y 264 a 264 ter pueden integrar el delito de terrorismo del art. 573.2 si se llevan a efecto con cualquiera de las finalidades previstas en el art. 573.1 CP, siendo más evidente esta posibilidad cuando concurren algunos de los subtipos agravados del art. 264.2 CP. En estos casos se produce un concurso de normas a resolver por el principio de especialidad recogido en el art. 8.1.º y en el propio art. 573.2. Ello no solamente incide en la calificación jurídica del hecho sino también en la determinación de la competencia objetiva al estar atribuido el conocimiento de esas tipologías delictivas a los órganos de la Audiencia Nacional.

El art. 264 bis CP sanciona un delito de resultado consistente en la obstaculización o interrupción del funcionamiento de un sistema informático ajeno, sin estar autorizado y de manera grave, a través de alguna de las acciones indicadas en el apartado primero del mismo precepto. El término grave ha de interpretarse en el sentido de que no toda obstaculización o interrupción del funcionamiento de un sistema se haría acreedora por sí sola de una sanción penal sino únicamente aquella que afecte realmente y de forma significativa a la funcionalidad del sistema atacado, circunstancia que será necesario analizar en cada supuesto en particular y que en un buen número de ocasiones precisará de los correspondientes informes técnicos.

El carácter ajeno de los sistemas informáticos objeto del delito ha de integrarse e interpretarse conjuntamente con el requisito de la falta de autorización o, dicho de otra forma, con la falta de disponibilidad de los contenidos o del sistema sobre el que se actúa; de tal forma que serían típicas aquellas acciones que se realizan intencionadamente sobre los mismos, con los objetivos indicados, sin estar habilitado para ello. En consecuencia, solo la actuación no necesitada de autorización sobre sistemas informáticos, respecto de los cuales su titular tiene pleno control y disposición, quedaría al margen de la aplicación de este precepto.

El art. 264 bis agrupa en tres apartados las conductas típicas a través de las cuales se pretende el resultado de obstaculizar o interrumpir el funcionamiento de un sistema informático. En el primer apartado incluye todas las relacionadas en el art. 264.1.º CP, que integrarán el delito del art. 264 bis cuando el efecto que se pretende y produce incide no solo en los elementos que integran el sistema, sino que afecta a la operatividad del sistema de información mismo. En el apartado b) se sanciona la transmisión e introducción de nuevos datos, cuando dichas conductas no se encuentren comprendidas en el apartado anterior y sean susceptibles de causar como efecto la interrupción u obstaculización del funcionamiento del sistema. Finalmente, en el apartado c) se relacionan los comportamientos de destruir, dañar, inutilizar, eliminar o sustituir, pero dirigidos directamente y en su conjunto al sistema de información o de almacenamiento masivo afectados por la acción ilícita. Muchos de estos comportamientos son reconducibles a las acciones típicas sancionadas en el art. 264.1.º CP por lo que en una pluralidad de ocasiones la aplicación de uno u otro tipo penal vendrá determinada por la capacidad de la acción para afectar a la operatividad o al funcionamiento del sistema informático en su conjunto.

El delito de abuso de dispositivos regulado en el art. 264 ter presenta idéntico contenido al del art. 197 ter, analizado en el marco de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos si bien en este supuesto los programas informáticos producidos, adquiridos para su uso, importados o facilitados a terceros han de estar concebidos o adaptados principalmente para la comisión de algunos de los delitos sancionados en los arts. 264 y 264 bis, al igual que las conductas típicas han de ejecutarse con esa misma finalidad. No obstante, en estos supuestos, y a diferencia de aquellos, la persecución de estas conductas no está sujeta a condiciones especiales de procedibilidad.

– *Consulta 1/2017, sobre las acciones típicas en el delito de atentado*

Se resuelve sobre el criterio a seguir en la interpretación del delito de atentado, tipificado en el art. 550 CP, más concretamente, si la intimidación grave, considerada de forma autónoma y no vinculada a la resistencia, puede subsumirse en el tipo de atentado.

Se considera que la intimidación grave ha dejado de ser, tras la reforma operada por la LO 1/2015 una modalidad comisiva autónoma del delito de atentado. En cuanto a la conducta de acometimiento, recogida como conducta típica en el art. 550.1CP puede abarcar los supuestos de grave intimidación, cuando supongan un acto formal de iniciación del ataque o un movimiento revelador del propósito agresivo.

En el resto de supuestos para que la intimidación grave pueda subsumirse en el tipo del art. 550.1 CP debe orientarse a oponer resistencia grave a la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos, por lo que cuando no sea un modo de resistencia no será constitutiva de delito de atentado. Los supuestos en los que la intimidación no sea equiparable al acometimiento podrán ser constitutivos de un delito de amenazas.

Se dispone que, como calificación alternativa, cuando se aprecie que la intimidación es susceptible de integrar el acometimiento y por tanto el delito de atentado se, incluirá, si existen dudas sobre la correcta subsunción, la calificación como delito de amenazas del art. 169 CP o, en su caso, como amenazas terroristas del art. 573 CP, a fin de sellar espacios de impunidad. Esta misma pauta será aplicable cuando se califiquen los hechos como atentado en su modalidad de intimidación grave con resistencia grave y existan dudas en la subsunción de la conducta.

La protección dispensada a los sujetos pasivos comprendidos en el art. 554 CP, no puede ser superior a la de los del art. 550 CP, por lo que, en todo caso, para calificar de atentado, será preciso que concurren las conductas previstas en este último precepto.

– *Instrucción 1/2017, sobre la actuación del fiscal para la protección de los derechos al honor, intimidad y propia imagen de menores de edad con discapacidad ante los medios de comunicación audiovisual*

Nace esta instrucción con el firme propósito de fijar pautas de actuación dirigidas a evitar la utilización por parte de algunos medios de comunicación de imágenes, informaciones o datos de identidad de menores en perjuicio de sus derechos e intereses. Se recuerdan actuaciones previas de la Fiscalía en este sentido, como son el *Convenio de colaboración entre la Fiscalía General del Estado y el Comité Español de*

Representantes de Personas con Discapacidad en materia de derecho de protección de la imagen de las niñas y niños con discapacidad en los medios de comunicación el 20 de noviembre de 2012, o las directrices impartidas por la Unidad de Menores de la FGE a los Fiscales especialistas (Dictamen n.º 3/2013, del Fiscal de Sala Coordinador de Menores).

En consonancia con tales antecedentes, se dispone que se deberá analizar la aparición de niños y niñas con discapacidad en los medios de comunicación audiovisual partiendo de la protección reforzada que ha de dispensarse en tanto menores de edad, por un lado, y personas con discapacidad, por otro. Por ello, aunque generalmente proceda la anuencia a la realización del programa, habrá que ponderar siempre si es necesario un control de su contenido y si el mismo ha de realizarse antes o después de la emisión.

Como criterios para valorar este tipo de emisiones, se establecen siguientes pautas: mantiene plena vigencia los criterios contenidos en la Instrucción 2/2006 sobre *el Fiscal y la Protección del Derecho al Honor, Intimidación y Propia Imagen de los Menores*. Tales criterios se aplicarán, tras las tareas de comprobación de los contenidos que exigen los arts. 3 LO 1/1982 y 4 LOPJM; la gravedad de las intromisiones en los derechos de los menores con discapacidad debe ponderarse a partir de la evolución producida en el seno de la autorregulación de contenidos televisivos e infancia y del derecho administrativo sancionador de carácter estatal y autonómico.

El marco de los contenidos intolerables que justificaría el ejercicio de acciones judiciales por parte del Fiscal se define desde la doble óptica de: los actos de intromisión ilegítima en los derechos fundamentales de cualquier persona menor de edad, y de los actos de discriminación en el tenor de la LGDPD.

En caso de que la emisión (cualquiera que sea su formato) no contemple contenidos intolerables, pero pueda verse afectada la imagen social de los niños y niñas con discapacidad por la actuación de los medios de comunicación por no responder a los criterios que exige la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, los Sres. Fiscales se abstendrán del ejercicio de acciones judiciales. No obstante, a través del Fiscal Delegado de Menores, se deberá poner el caso en conocimiento de la Unidad de Menores de la FGE al objeto de su correspondiente comunicación al CERMI para que, por el mismo, se procuren las restantes medidas alternativas para la plena eficacia del derecho fundamental.

Para facilitar la labor de la Comisión de Seguimiento creada conforme al Convenio de colaboración entre la FGE y el CERMI, los Sres. Fiscales comunicarán a la Unidad de Menores de la FGE los

casos relativos a programas cuyos contenidos o formas de presentación revistan características especiales o alguna complejidad.

Finalmente, se dispone que el despacho de estos asuntos corresponde a las Secciones de Menores de las Fiscalías Provinciales.

– *Instrucción 2/2017, sobre procesos incoados a raíz de la deducción de testimonios de una causa principal.*

En los supuestos de iniciación de un proceso penal partiendo de informaciones o datos procedentes de otra causa, sobre la base de unos indicios de delito obtenidos en el curso de una intervención de comunicaciones previa, si el Juez instructor no lo hace de oficio, se indica a los Sres. Fiscales que deberán instar que se unan al segundo proceso los correspondientes testimonios del procedimiento de origen. Esta diligencia habrá de interesarse desde el primer momento, especialmente cuando las defensas de los acusados hayan impugnado la diligencia de intervención de las comunicaciones.

En todo caso, cuando se formula el escrito de acusación, se deberá comprobar si efectivamente constan los testimonios de la causa matriz. En caso contrario se deberá instar su práctica.

En cuanto a qué deban considerarse testimonios a incorporar, se indica que serán en cada supuesto concreto todos los testimonios de los particulares necesarios para acreditar la legitimidad de la injerencia. Como mínimo habrán de incorporarse la solicitud inicial para la adopción de la medida, la resolución judicial que la acuerda y todas las peticiones y resoluciones judiciales de prórroga recaídas en el procedimiento de origen, así como el resultado concreto de las diligencias practicadas en la causa matriz que fundamente la apertura de la causa derivada.

Estas directrices serán también aplicables cuando en la causa matriz se hubiera acordado cualquier otra diligencia de investigación restrictiva de derechos fundamentales y se pretendiera utilizar sus resultados en un ulterior procedimiento.

– *Instrucción 3/2017, sobre documentación de las diligencias sumariales de naturaleza personal*

Tras la LO 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la *Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial*, proclama, mediante la reforma del apartado primero del art. 230 LOPJ, la obligación de Juzgados, Tribunales y Fiscalías de utilizar «cualesquiera medios téc-

nicos, electrónicos, informáticos y telemáticos, puestos a su disposición para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones», se proporciona rango orgánico a elementos esenciales del marco normativo prefigurado en la Ley 18/2011, de 5 de julio, *reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia*, en lo que concierne a la obligatoriedad de uso de los medios tecnológicos (art. 8), eficacia transversal complementadora de las leyes procesales (Disposición adicional séptima) y aplicabilidad al Ministerio Fiscal (Disposición adicional novena).

Se destaca que, esta obligatoriedad del uso de medios tecnológicos en la Administración de Justicia, ya había tenido plasmación procesal en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, así como en la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, *de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina Judicial*, y la Ley 42/2015, de 5 de octubre, *de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil*.

En el contexto de estas reformas legislativas, determinados juzgados de instrucción asumieron que el mandato del renovado art. 147 LEC era de aplicación supletoria al proceso penal, con expresa invocación del art. 4 LEC, y pasaron a documentar de manera ordinaria las diligencias sumariales de naturaleza personal (testificales, periciales, así como declaraciones de procesados e investigados) mediante los sistemas electrónicos de videgrabación instalados en sus salas de vista, así lo que es un complemento eficaz del acta escrita pasa a convertirse en su sustitutivo a todos los efectos. Por esta interpretación, la LEC pasaba ser norma supletoria a principal, derogando el régimen singular de documentación establecido en la LECrim.

Se rechaza que en el ámbito de la instrucción penal no se pueda dar forma escrita a las actas electrónicas obtenidas de los sistemas técnicos de grabación habilitados en los Juzgados de Instrucción: en primer lugar, la diligencias sumariales sólo pueden considerarse actuaciones orales en un sentido lato, no técnico; y, en segundo lugar, ni la LO 7/2015, ni ninguna otra norma con rango de ley, ha reformado las múltiples disposiciones de la LECrim que aluden a la documentación de los actos de instrucción mediante acta escrita, su vigencia sólo puede negarse si se acredita una evidente incompatibilidad de contenidos entre la norma advenida y las disposiciones de la LECrim, incompatibilidad que en este caso no se produce.

Se apunta que una interpretación rigorista de las nuevas normas que regulan el uso de las tecnologías de la información en la Administración de Justicia puede crear un entorpecimiento o restricción de desenvolvimiento de los medios de prueba en el acto del juicio oral.

Asimismo, se destaca que el acta escrita es el medio más eficaz para concretar las citas en asuntos de cierta complejidad y que una prohibición absoluta de documentación escrita de los actos sumariales redundaría en perjuicio de las posibilidades de defensa de las partes.

Se concluye que el art. 230.1 LOPJ, desde la entrada en vigor de la LO 7/2015, acaecida el día 1 de octubre de 2015, ha generalizado el mandato de utilizar los medios técnicos puestos a disposición de la Administración de Justicia, por lo que se ha de estimar que en su ámbito de aplicación han quedado comprendidos los actos de instrucción penal de naturaleza personal (declaraciones de procesados, investigados, testigos y peritos).

El art. 230.2 LOPJ considera que las grabaciones videográficas que reúnan los requisitos técnicos de integridad y autenticidad exigidos por la Ley son documentos originales, por lo que pueden suplir eficazmente al acta escrita prevista en la LECrim para la documentación de las diligencias sumariales.

La prohibición de transcribir en soporte escrito las grabaciones videográficas recogida en el art. 230.3 LOPJ no alcanza, sin embargo, a las diligencias sumariales, por no estar comprendidas en su supuesto de hecho.

Se dispone que, cuando se estime necesario por los Sres. Fiscales para preparar adecuadamente la prueba, interesarán de forma razonada del Juzgado la documentación escrita de las diligencias sumariales. Si su petición se viese denegada, podrán hacer uso de los recursos habilitados en la LECrim para hacer valer su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) y de defensa, en la modalidad de utilización de medios de prueba eficaces y pertinentes (art. 24.2 CE).

7.2 Formación inicial

La formación de los Fiscales durante el pasado año 2017, como en años anteriores, se ha desarrollado en dos fases en las que conjuntamente, la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos se han preocupado y trabajado por ofrecer la mejor formación posible, integral, especializada y de alta calidad, a los Fiscales, antes de ingresar en la carrera, potenciando la adquisición de las habilidades necesarias para poner en práctica los conocimientos adquiridos durante la fase de la oposición, a fin de garantizar la prestación de un mejor servicio público con calidad y eficacia que exige ejercicio de las funciones que los está encomendado.

Se sigue complementando además la formación con otros tipos de herramientas que se inician y desarrollan con las exigencias de la evolución social y las nuevas tecnologías y que ayudan a conformar una concepción más moderna y una adecuada integración de conocimientos. Nos referimos a la formación en línea y la formación internacional.

La tarea formativa de los 35 Fiscales en prácticas de la 56.^a promoción de la Carrera Fiscal comienza con una primera fase de acceso o fase de formación previa al ingreso en la Carrera Fiscal, es la fase de formación inicial o curso selectivo en que la Fiscalía General del Estado ha intervenido activamente con el Centro de Estudios Jurídicos en el diseño de los contenidos del Programa.

Como viene siendo habitual, la formación inicial se desarrolla a su vez en dos fases: la primera teórico práctica que dura tres meses, se inició el 9 de enero de 2017 y se extendió hasta el 31 de marzo de 2017 y a la que se intenta dar un contenido y estructura formal eminentemente práctico a fin de que sirva de introducción para la siguiente fase de prácticas tuteladas. Este segundo periodo de prácticas tuteladas comienza a continuación del anterior y dura cuatro meses, se inició en abril y finaliza el 31 de julio de 2017.

A continuación, se detalla la información de este curso:

Datos básicos del curso selectivo	56. ^a promoción de la Carrera Fiscal
Año de convocatoria	2016
Curso selectivo	2017
N.º de fiscales en prácticas	35

Datos básicos del curso selectivo	56.ª promoción de la Carrera Fiscal
Período curso teórico-práctico en el CEJ (1.ª fase curso selectivo)	3 meses (9 enero 2017 a 31 de marzo 2017)
N.º de profesores de la 1.ª fase	95 (Incluidos seminarios y charlas)
N.º de horas en charlas	32
Horas de charlas de Fiscales de Sala	15
Horas de visitas a instituciones y organismos públicos y privados . . .	40
Horas de prácticas en la Fiscalía de Madrid	40
Horas de formación teórica total por fiscal en prácticas (sin incluir charlas ni h. prácticas)	233
Periodo de prácticas tuteladas en fiscalías (2.ª fase curso selectivo)	4 meses (abril 2017 a 31 de julio 2017)
N.º de coordinadores	24
N.º de tutores principales en la 2.ª fase	109
Nombramiento como fiscales de carrera	6 de septiembre de 2017

El diseño del curso selectivo se encuentra inserto en el Plan Estratégico diseñado para el periodo 2016-2019.

El plan Docente de Formación se dividió en las siguientes materias:

Materias	
Profesor/Coordinador	Ponencias
El Ministerio Fiscal	
Moix Blázquez, Manuel	Coordinador Naturaleza Jurídica. Principios de actuación. Relación del MF con los poderes públicos.
Campoy Rebollo, Pedro	Órganos del MF. De la organización, competencia y planta. Organización territorial y Órganos del MF. De la organización, competencia y planta. Organización territorial y relaciones entre órganos del MF.
Hidalgo de Morillo Jiménez, Agustín	Responsabilidad de los Miembros del MF. Civil. Penal. Disciplinaria. Procedimiento disciplinario. Infracciones y sanciones. Órganos sancionadores. Recursos.

Olavarria Iglesia, María Teresa	La Carrera Fiscal. Categorías que la integran y provisión de destinos. Escalafón, ascensos y concursos. Adquisición y pérdida de la condición de Fiscal. Situaciones administrativas en la Carrera Fiscal.
Ortolá Fayos, Salvador	Estatuto Jurídico del fiscal. Derechos y deberes de los miembros del MF. Régimen de incompatibilidades y prohibiciones. Ética y deontología de la profesión fiscal.

Policía Judicial

Polo Rodríguez, José Javier	Coordinador El Ministerio Fiscal y Policía Judicial.
Iglesias García, Manuel José	Policía Judicial. Escenas del crimen (Grupo General).
Nava de Miguel, José Carlos de la	Policía Judicial El Atestado Judicial. Policía Judicial Menores/Extranjería.
Serna Coronado, Julián	Policía Judicial Menores/Extranjería..

Práctica Procesal y Penal

Escobar Jiménez, Rafael	Coordinador.
Prieto Rivera, Fernando	Coordinador.
Altolaquirre Sagastiberri, José	Diligencias previas e instrucción. Los derechos fundamentales en el proceso penal.
Cera Galache, Eva M.ª de la	Práctica del procedimiento abreviado.
Díaz Roldán, Carlos	Diligencias previas e instrucción. Los derechos fundamentales en el proceso penal.
Escobar Jiménez, Rafael	Acumulación A, Cuestiones procesales, Determinación de la pena, calificación y extracto.
Galdeano Santamaría, Ana María	Diligencias Previas e Instrucción, Práctica del Procedimiento Abreviado referido a la violencia de género.
García de la Concha Álvarez, Marta	Diligencias previas e instrucción. Los derechos fundamentales en el proceso penal.
García de Miguel, Mario	Diligencias previas e instrucción. Los derechos fundamentales en el proceso penal.
Herranz Sanz, Olga Milagros	Diligencias de investigación, Diligencias de investigación, Diligencias previas e instrucción. Los derechos fun.
Llop Esteban, María Luisa	Diligencias previas e instrucción. Los derechos fundamentales en el proceso penal A.
Martínez Moreno, Raúl	Práctica del procedimiento abreviado.
Ortiz Navarro, José Francisco	Ejecución.
Perals Calleja, José	Sumario.

Peramato Martín, Teresa	Diligencias Previas e Instrucción Práctica del Procedimiento Abreviado referido a la violencia de género.
Prieto Rivera, Fernando	Acumulación B, Cuestiones procesales, Determinación de la pena, calificación y extracto.

Juicios

Bernal Marsalla, Lorenzo Raimundo	Coordinador. Delitos leves I. Delitos Leves II. Técnicas de litigación e interrogatorio.
Altolaguirre Sagastiberri, José	Delitos leves (I).
Cera Galache, Eva M.ª de la	Procedimientos abreviados I. Técnicas de litigación e interrogatorio.
Cuenca Ruiz, Ana	Procedimientos abreviados II.
Díaz Roldán, Carlos	Práctica de Jurado.
García de la Concha Álvarez, Marta	Práctica de Jurado.
García de Miguel, Mario	Guardias. Juicios rápidos.
Herranz Sanz, Olga Milagros	Delitos leves I.
Llop Esteban, María Luisa	Delitos leves I. Guardias. Juicios rápidos. Procedimientos abreviados II.
Lucas Martín, Ignacio Miguel de	Juicio oral, conformidades y cuestiones previas. Acumulación. Acumulación. Ejecución. Ejecución. Simulación de juicios
Prados Frutos, Eduardo	Recursos.
Sánchez-Cervera Valdés, María	Delitos Leves II. Juicio oral, conformidades y cuestiones previas. Procedimientos abreviados I.

El Fiscal en la Jurisdicción de Menores

García Ingelmo, Francisco Manuel	Coordinador.
--	--------------

Fernández Olmo, Isabel	MENORES: Fase de Instrucción. Diligencias preliminares. Expedientes B. Menores: Medidas y reglas de aplicación B. Menores: Principio de oportunidad B. Menores: Principios informadores B.
García Ingelmo, Francisco Manuel	Menores: Detención y medidas cautelares A. Menores: Ejecución. Responsabilidad civil A. Menores: Fase intermedia A. Menores: Instrucción: diligencias a practicar, ET, letrados de las partes A. Menores: Protección A.
Huéllamo Buendía, Antonio Jesús	Menores: Detención y medidas cautelares B. Menores: Ejecución. Responsabilidad civil B. Menores: Fase intermedia B. Menores: Instrucción: diligencias a practicar, ET, letrados de las partes B. Menores: Protección B.
Rodríguez González, María Guadalupe	Menores: Fase de Instrucción. Diligencias preliminares. Expedientes A. Menores: Medidas y reglas de aplicación A. Menores: Principios informadores A.

El Fiscal en el orden jurisdiccional civil

Paz Rubio, José María	Coordinador. Internamientos involuntarios artículo 763, control de tutelas, y cuestiones de competencia.
Fábrega Ruiz, Cristóbal Francisco.	Procesos de capacidad, intervención del Ministerio Fiscal en los mismos. Procesos de capacidad, intervención del Ministerio Fiscal en los mismos.
Ganzenmuller Roig, Carlos	Convención de Nueva York sobre los derechos de las personas con discapacidad. La doctrina de la Fiscalía General de Estado en materia de discapacidad.
Marticorena Serrano, María del.	Procesos que afectan a la familia.
Martinez-Pardo Cabrillo, M.ª del.	El Ministerio Fiscal y la protección civil del honor, la intimidad y la propia imagen.
Rodríguez Suarez, Inmaculada	El Ministerio Fiscal y los procedimientos de jurisdicción voluntaria.
Valdivieso Barrera, Elena.	Jurisdicción y Competencia de la Fiscalía (A y B).

El Fiscal garante de los Derechos Ciudadanos

Tirado Estrada, Jesús José	<p>Coordinador.</p> <p>Derechos fundamentales y proceso penal.</p> <p>Incidente de nulidad de actuaciones.</p> <p>La cuestión de inconstitucionalidad. Intervención en la fase judicial.</p> <p>Legitimación del Ministerio Fiscal para interponer recurso de amparo.</p>
Contreras Cerezo, Pablo Vicente	<p>Derechos fundamentales y orden jurisdiccional contencioso-administrativo.</p> <p>Derechos fundamentales y proceso penal.</p>
Esteban Rincon, Eduardo	<p>Derechos Fundamentales y orden jurisdiccional civil</p>
Guajardo Pérez, María Isabel	<p>Derechos fundamentales y proceso penal.</p> <p>Incidente de nulidad de actuaciones.</p> <p>La cuestión de inconstitucionalidad. Intervención en la fase judicial.</p> <p>Legitimación del Ministerio Fiscal para interponer recurso de amparo.</p>
Sánchez Conde, María Ángeles	<p>Derechos fundamentales y orden jurisdiccional civil.</p> <p>Derechos fundamentales y orden social.</p>

Cooperación jurídica internacional

Bermejo Romero de Terreros, Juan	<p style="text-align: center;">Coordinador.</p> <p>Herramientas e instrumentos de cooperación jurídico internacional.</p>
Baena Olabe, María del Carmen	<p>instrumentos de reconocimiento mutuo.</p>
Heras García, María de las	<p>Instrumentos de reconocimiento mutuo.</p> <p>Las peticiones de auxilio judicial, su tramitación.</p>

Criminalidad Informática

Tejada de la Fuente, Elvira	<p>Coordinador.</p> <p>La red de Fiscales especializados en Criminalidad Informática.</p>
Martín Martín de la Escalera, Ana María	<p>La investigación tecnológica. Conservación, preservación y acceso al proceso de datos informáticos; Registro de dispositivos..</p> <p>Aspectos específicos de D.º Penal sustantivo: Tipificación penal de ataques informáticos; Sexting.</p>

Extranjería	
Fernández Olalla, Patricia	<p>Coordinador.</p> <p>La expulsión del territorio español en sustitución de la pena conforme al art 89 del CP. la expulsión sustitutiva del proceso penal conforme al art 57.7 de la LOEX.</p> <p>Trata de seres humanos y delitos conexos.</p>
Lafont Nicuesa, Luis	<p>Determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados y referencia a la figura de los niños rehenes mediante casos prácticos.</p> <p>Determinación de la edad de los menores extranjeros no acompañados y referencia a la figura de los niños rehenes mediante casos prácticos.</p>
Sánchez Álvarez, Beatriz	<p>Internamiento cautelar de extranjeros.</p> <p>La expulsión del territorio español en sustitución de la pena conforme al art. 89 del CP. La expulsión sustitutiva del proceso penal conforme al art 57.7 de la LOEX.</p> <p>Trata de seres humanos y delitos conexos.</p>
Vigilancia Penitenciaria	
Plasencia Domínguez, Natividad Pilar	<p style="text-align: center;">Coordinador.</p> <p>Las Instancias de control del Sistema penitenciario: Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria A.</p> <p>Las Instancias de control del Sistema penitenciario: Los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria B.</p> <p>Las visitas penitenciarias.</p> <p>Los permisos penitenciarios A.</p> <p>Los permisos penitenciarios B.</p>
Gamez Sánchez, María Victoria	<p>La clasificación de los penados A.</p> <p>La libertad condicional A.</p> <p>La libertad condicional B.</p>
Seminarios-Taller	
Gamo Yagüe, Rocío	Mesa Redonda.
Menoyo González, José Luis.	Mesa Redonda.
Remón Peñalver, Enrique José	Mesa Redonda.
Hemando García, Rosa María Henar	La mediación en el ámbito penal.
Moral García, Antonio del	El Fiscal y las relaciones con los Tribunales.
Olmo León, José.	Taller práctico sobre aspectos técnicos de los ciberdelitos y la investigación tecnológica (Direcciones IP, dominios, red, tor, Redes P2P, Hash, ataques por botnets, Ddos, malware)..

Sánchez-Ramade, Jose Luis	Aproximación a Delitos contra el Medio Ambiente. Aproximación a Delitos Económicos. Seminario valoración daño corporal. Taller de Habilidades I. Taller de Habilidades II. Taller de Habilidades III. Taller de Habilidades IV. Taller de Habilidades V. Taller de Comunicación I. Taller de Comunicación II. Taller de Comunicación III.
Rojo Eugercio, Yolanda	Taller práctico sobre aspectos técnicos de los ciberdelitos y la investigación tecnológica.
Sánchez Álvarez, Pilar	La mediación en el ámbito penal.
Torres-Dulce Lifante, Eduardo	Seminario «Cine y Derecho».

Actividades Instrumentales

Gutiérrez Vicén, Germán	Sistemas Informáticos (Fortuny).
Jiménez Suárez, Encarnación	Sistemas informáticos Fortuny (Practica).

Charlas de Fiscal de Sala

Tejada de la Fuente, Elvira	Charla del Fiscal de Sala contra la Ciberdelincuencia Charla del Fiscal de Sala contra la corrupción y crimen organizado.
Morán Martínez, Rosa Ana	Charla del Fiscal de Sala de Cooperación Internacional.
Aya Onsalo, Alfonso	Charla del Fiscal de Sala de Delitos de Odio.
Campos Campos, Juan Ignacio	Charla del Fiscal de Sala de Delitos Económicos.
Sánchez-Covisa Villa, Joaquín Antonio	Charla del Fiscal de Sala de Extranjería.
Paz Rubio, José María	Charla del Fiscal de Sala de lo Civil.
Vercher Noguera, Antonio	Charla del Fiscal de Sala de Medio Ambiente.
Huete Nogueras, Jose Javier	Charla del Fiscal de Sala de Menores.
Fernández Valcarce, Pilar	Charla del Fiscal de Sala de Protección a las Víctimas.
Vargas Cabrera, Bartolome	Charla del Fiscal de Sala de Seguridad Vial.
Muñoz Marin, Ángel Javier	Charla del Fiscal de Sala de Siniestralidad Laboral.
Gámez Sánchez, María Victoria	Charla del Fiscal de Sala de Vigilancia Penitenciaria.
Plasencia Domínguez, Natividad Pilar	Charla del Fiscal de Sala de Vigilancia Penitenciaria.
Martín Nájera, María Pilar	Charla del Fiscal de Sala de Violencia sobre la mujer.

Charlas

Yebra López, Alicia	Charla «El Fiscal ante su primer destino» y «el fiscal ante su primer guardia».
Colmenares Soto, Pedro	Charla Agencia de Protección de Datos.
Viada Bardaji, Salvador	Charla APIF. Asociación Profesional e Independiente de fiscales.
Herrero García, Jaime	Charla Banco de España.
García Ortiz, Álvaro	Charla de la UPF. Unión Progresista de Fiscales.
Alonso Cristobal, Jesús	Charla de la AF. Asociaciones de Fiscales.
Fernández Ruiz, Pablo	Charla del Abogado del Estado de la AEMET.
	Charla del Director del Centro Nacional de Inteligencia.
Rosa Cortina, José Miguel de la	Charla Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía Gral. del Estado.
Cartagena Pastor, Fausto José	Charla Inspección Fiscal.
Pendás García, Benigno	Charla Vigencia de la Constitución Española.
Reguera Cardiel, Juan Carlos	Charla-Taller Carta de Derechos Ciudadanos.
Ogando Muradás, Esther	Charla-Taller: Carta de Derechos de los Ciudadanos.
Arranz Manzanares, Jorge	El Fiscal ante su primera Guardia.
Santamaria Leo, Francisco Javier	Fiscal ante su primera Guardia.
Gutierrez Ordoñez, Salvador	Taller de lenguaje Jurídico.

Los formatos de las materias teóricas se van adaptando periódicamente a las nuevas reformas legislativas e inquietudes de la carrera en cuanto a su formato mediante la introducción de nuevos formatos de trabajo con un enfoque más práctico, mesas redondas, talleres, visitas a las fiscalías, juzgados y tribunales como introducción a la fase de prácticas tuteladas.

Añadir además que esta fase se complementa con visitas a organismos e instituciones que se relacionan con el ejercicio de nuestras funciones y que enriquecen la formación.

En este curso selectivo, las prácticas se realizaron en diversas Fiscalías Provinciales y de Área, en las que a los alumnos se les asignó un tutor seleccionado por el CEJ en colaboración con la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Con el fin de facilitar que los alumnos pudieran residir en este periodo cerca del domicilio familiar, se consultaron sus preferencias sobre las localidades en las que preferían realizar las prácticas.

Para alcanzar los objetivos formativos de esta fase se mantuvo una estrecha colaboración y una fluida comunicación entre el Centro de Estudios Jurídicos, la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, los Fiscales Jefes de las Fiscalías Superiores y Provinciales donde se desarrollaron las prácticas y los propios fiscales tutores designados.

El periodo de prácticas tuteladas tuvo una duración total de 4 meses y se dividió, conforme al Plan de Ejecución diseñado y recogido en el cuadro.

Los contenidos formativos de estas prácticas se dividieron en actividades obligatorias, en atención a la concreta área a desarrollar, y actividades complementarias que establecieron indistintamente, el Coordinador de tutorías, el tutor, e incluso el propio fiscal en prácticas.

Dado el número de tutores que participan en esta fase, y con objeto de mantener una unificación de criterios docentes, se siguió un Protocolo de Actuación para coordinadores y tutores, donde se fijan los contenidos formativos, las obligaciones del tutor y la organización de las prácticas en las que se da prioridad a la materia penal, respecto al resto de especialidades.

Como en años anteriores, al inicio de esta segunda fase, se creó un grupo de trabajo de seguimiento de las prácticas tuteladas, para resolver las posibles incidencias que pudieran producirse durante este periodo.

La Junta de Evaluación de profesores tuvo lugar el 28 de julio de 2017, una vez que se dispuso de todos los informes finales de prácticas.

El acto de elección de destinos se realizó el día 4 de septiembre de 2017 en el CEJ a las 15:30 horas. La entrega de despachos tuvo lugar el 6 de septiembre de 2017, a las 19:00, en el Salón de Actos del CEJ. El Ministro de Justicia, con la presencia del Fiscal General del Estado, entregó al número uno de la Promoción, Emilio Fernández Hernández, la Cruz distinguida de 2.^a clase de San Raimundo de Peñafort y el título de la orden.

7.3 Formación continuada

La Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado de conformidad con lo dispuesto en la Instrucción n.º 5/1993 de 27 de diciembre, *sobre la formación y perfeccionamiento de los miembros de la Carrera Fiscal* y de las funciones que recoge el apartado 2.º, del art. 13.3 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal procedió a la elaboración del Plan de Formación Continuada para el año 2018 en el último trimestre del año 2017.

Para ello se analizaron las sugerencias que los miembros de la Carrera Fiscal habían efectuado en respuesta a la solicitud realizada en el segundo trimestre del año 2016, recabando su colaboración para la planificación de las actividades formativas. También se interesó la opinión de los Fiscales de Sala especialistas acerca de la necesidad de celebrar sus correspondientes jornadas.

Asimismo, se valoraron las necesidades formativas detectadas desde la Fiscalía General del Estado, y las novedades legislativas. Finalmente se tuvieron en consideración la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año anterior y las últimas Circulares e Instrucciones de la Fiscalía General del Estado. La Comisión de Formación se reunió en sesión el día 26 de octubre de 2017 para el estudio y debate del borrador del Programa de Formación Continuada, conforme a las previsiones de la Instrucción 5/1993, de 27 de diciembre sobre la formación y perfeccionamiento de los miembros de la Carrera Fiscal.

El Centro de Estudios Jurídicos, valorando la disponibilidad presupuestaria, que no experimentó reducción alguna, asumió la propuesta formativa aprobada por el Consejo Fiscal, e incluyó algunas actividades formativas que estimó de interés para la formación de los Fiscales, previa consulta con la Fiscalía General del Estado a través de la Secretaría Técnica.

Al diseñar el Plan de Formación Continuada se ha concretado el objetivo pedagógico de cada actividad formativa, identificando los destinatarios de dicho curso, si son Fiscales en general, Fiscales especialistas o si van dirigidos a Fiscales de las últimas promociones. Así mismo, se ha determinado la metodología del curso, diferenciando los cursos que por su contenido han de seguir el sistema tradicional de ponencias y mesas redondas de aquellos otros a los que se ha querido dar un contenido más práctico. Y, finalmente se ha especificado la finalidad formativa de la actividad.

El Plan de Formación Continuada goza de un margen de flexibilidad, lo que ha permitido ir incorporando actividades que si bien no estaban inicialmente programadas han sido valoradas positivamente

por el Centro de Estudios Jurídicos y la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, al responder a exigencias formativas de gran interés para la Carrera Fiscal.

Durante el año 2017 y como ya viene siendo habitual, se han reservado diversas plazas para la participación de Fiscales en el Plan de Formación de Abogados del Estado o Letrados de la Administración de Justicia.

7.3.1 FORMACIÓN PRESENCIAL

7.3.1.1 *Cursos extensos*

– Seminario de especialización en menores: Responsabilidad penal y protección. Novedades legislativas.

Director: Ilmo. Sr. Don Francisco Manuel García Ingelmo.

– Sustracción parental de menores: aspectos civiles, penales y procesales.

Director: Ilmo. Sr. Don Benito Soriano Ibáñez.

– Delitos contra la Administración pública: en especial, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Novedades tras la reforma 1/2015.

Director: Excmo. Sr. Don Fidel Cadena Serrano.

– Baremo para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas.

Director: Ilma. Sra. Doña Rosa María Pérez Martínez.

7.3.1.2 *Cursos breves*

– La prueba pericial científica. Especial referencia a los perfiles de ADN como método de investigación del delito.

Director: Ilmo. Sr. Don Manuel Dolz Lago.

– La fase de instrucción. Los plazos de la instrucción. Experiencias aplicativas del art. 324 LECrim.

Director: Ilmo. Sr. Don Luis Fernández Arévalo.

– Los delitos leves: aspectos sustantivos y procesales.

Directora: Ilma. Sra. Doña Virginia Sánchez Prieto.

– El Estatuto de la Víctima. Referencia a desaparecidos.

Directora: Ilma. Sra. Doña Isabel Morán González.

– La nueva regulación del recurso de apelación. La generalización de la segunda instancia. Recurso de revisión.

Director: Ilmo. Sr. Don. Fernando Prieto Rivera.

– Novedades en la jurisprudencia del TEDH.

Director: Excmo. Sr. Don José Ramón Noreña Salto.

- Libertad de prensa y derechos constitucionales.
Director: Ilmo. Sr. Don Eduardo Esteban Rincón.
- Cuestiones médico-forenses con trascendencia en el proceso penal. Especial referencia a la salud mental.
Directora: Ilma. Sra. Doña Carmen de la Fuente Méndez.
- Delitos contra el patrimonio histórico. Especial referencia al patrimonio arqueológico.
Director: Ilmo. Sr. Don Javier Rufino Rus.
- Delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio. Novedades tras la reforma operada por LO 1/2015.
Director: Ilma. Sra. Doña María Ángeles Montes Álvaro.
- Jurisdicción Penal y Extranjería. Directora.
Directora: Ilma. Sra. Doña Natividad Plasencia Domínguez.
- Frustración en la ejecución e insolvencias punibles. Novedades en la Ley 1/2015.
Directora: Ilma. Sra. D.^a María Ángeles Garrido Lorenzo.
- Delincuencia vial.
Directora: Ilmo. Sr. D. Mario Jesús Sanz Fernández Vega.
- Delitos societarios. El delito de administración desleal.
Directora: Ilma. Sra. Doña Isabel de las Cuevas Miaja.
- La acción popular y la acusación particular. Examen constitucional, experiencia aplicativa y posibles reformas.
Director: Ilmo. Sr. Don Jesús Tirado Estrada.
- Violencia de género a la luz de las últimas reformas. Algunos problemas prácticos.
Directora: Ilma. Sra. Doña Teresa Peramato Martín.

7.3.1.3 *Talleres de trabajo*

- Taller sobre juicios urgentes y conformidades. Especial referencia a las conformidades en el Juzgado de lo Penal y en la Audiencia.
Director: Ilma. Sra. Doña Paz Ruiz Franco.
- Taller sobre jurado.
Directora: Ilma. Sra. Doña Teresa Duerto Argemi.
- Taller herramientas ofimáticas.
Director: Ilmo. Sr. Don Germán Gutiérrez Vicén.
- Taller sobre técnicas de investigación en los delitos relacionados con la criminalidad organizada.
Director: Ilmo. Sr. Don Antonio Romeral Moraleda.
- Taller sobre incendios forestales y en zonas no forestales.
Director: Ilmo. Sr. Don Álvaro García Ortiz.
- Taller sobre nuevos medios de investigación tecnológicos.

- Director: Ilma. Sra. Doña Teresa Yoldi Muñoz.
– Taller sobre delitos de corrupción de menores a través de las tecnologías de la información y la comunicación.
Director: Ilmo. Sr. Don José Díaz Cappa.

7.3.1.4 *Jornadas*

- Fase de ejecución: en especial, acumulaciones y refundiciones, libertad condicional e indulto. Regulación.
Director: Ilmo. Sr. Don Pablo Gomez-Escolar Mazuela.
– Jornada sobre la orden de detención y entrega europea.
Director: Ilmo. Sr. Don Pedro Pérez Enciso.
– Contaminación y residuos.
Director: Ilmo. Sr. Don Javier Ródenas Molina.
– Jornada sobre técnicas de comunicación.
Dinamic Synergi.
– Competencia objetiva y territorial en procesos de modificación de medidas. Conflictos con los Juzgados de Violencia sobre la mujer.
Director: Ilmo. Sr. Don Javier Muñoz Cuesta.
– La nueva regulación de las medidas de investigación tecnológica.
Director: Ilmo. Sr. Don Fernando Bentabol Manzanares.

7.3.1.5 *Jornadas de Especialistas*

- Jornadas de especialistas en medio ambiente y urbanismo.
Dirección: Excmo. Sr. D. Antonio Vercher Noguera.
– Jornadas de especialistas en criminalidad informática.
Dirección: Excma. Sra. D.^a Elvira Tejada de la Fuente.
– Jornadas de especialistas en tutela penal de la igualdad y contra la discriminación.
Dirección: Excmo. Sr. D. Alfonso Aya Onsalo.
– Jornadas de especialistas en materia de violencia sobre la mujer.
Dirección: Excma. Sra. D.^a María del Pilar Martín Nájera.
– Jornadas de especialistas en menores.
Dirección: Excmo. Sr. D. José Javier Huete Noguera.
– Jornadas de especialistas en seguridad vial.
Dirección: Excmo. Sr. D. Bartolomé Vargas Cabrera.
– Jornadas de especialistas en extranjería.
Dirección: Excmo. Sr. D. Joaquín Sánchez-Covisa Villa.
– Jornadas de especialistas en el orden civil.
Dirección: Excmo. Sr. D. José María Paz Rubio.

- Jornadas de especialistas en el orden contencioso.
Dirección: Excmo. Sr. D. Pedro Crespo Barquero.
- Jornadas de la red de cooperación internacional.
Dirección: Excma. Sra. D.^a Rosa Ana Moran Martínez.
- Jornadas de especialistas en la protección y garantías de los derechos de las personas con discapacidad.
Dirección: Ilmo. Sr. D. Carlos Ganzenmuller Roig.
- Jornadas de especialistas sobre protección y tutela de las víctimas.
Dirección: Excma. Sra. D.^a Pilar Fernández Valcarce.
- Jornadas de especialistas en vigilancia penitenciaria.
Director: Excmo. Sr. D. Jaime Moreno Verdejo.
- Jornadas de especialistas en delincuencia económica.
Director: Excmo. Sr. D. Juan Ignacio Campos Campos.
- Jornadas de especialistas en la jurisdicción militar.
Director: Excmo. Sr. D. Fernando Marín Castán.
- Jornadas de especialistas en siniestralidad laboral.
Director: Excmo. Sr. D. Anselmo Sánchez Tembleque Pineda.

7.3.1.6 *Curso organizado por el Consejo Fiscal*

- Perspectivas de futuro del Ministerio Fiscal: autonomía y estructura orgánica.
Director: Ilmo. Sr. D. Fernando Rodríguez Rey.

7.3.1.7 *Cursos organizados por las Asociaciones de Fiscales*

7.3.1.7.1 *Cursos organizados por la Asociación de Fiscales*

- Responsabilidad sanitaria y la nueva configuración legal de la imprudencia médica.
Director: Ilmo. Sr. D. Juan Calixto Galan Caceres.
- El Fiscal ante los procesos penales de grandes catástrofes.
Director: Ilmo. Sr. D. Lorenzo Raimundo Bernal Marsalla.
- La jurisprudencia del TEDH y su influencia en el trabajo diario de los Fiscales españoles.
Director: Ilmo. Sr. D. José Miguel Company Catalá.

7.3.1.7.2 *Cursos organizados por la Unión Progresista de Fiscales*

- Mujer e igualdad. Perspectiva de genero.

Directora: Ilma. Sra. D.^a Virginia García Aller.

– Modelos de autonomía e independencia de los Fiscales en el Derecho Comparado.

Director: Ilmo. Sr. D. Álvaro García Ortiz.

7.3.1.7.3 Curso organizado por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales

– La reforma de la Justicia.

Director: Ilmo. Sr. D. José Antonio Díez Rodríguez.

7.3.1.8 *En colaboración con el Consejo General del Poder Judicial*

– Mecanismos de defensa contra el estrés.

Director: Ilmo. Sr. D. José M.^a Márquez Jurado.

– Derechos fundamentales y tutela judicial en el ámbito laboral con especial referencia al acoso y protección de datos. Aspectos sustantivos y procesales.

Director Ilmo. Sr. D. Ignacio Moreno González-Aller.

– El derecho y la jurisprudencia europea en materia de extranjería.

Director: Ilmo. Sr. D. Francisco Pleite Guadamillas.

– Condiciones generales de la contratación y protección de los consumidores: la contratación seriada.

Director: Ilmo. Sr. D. José Manuel Regadera Sanz.

– Procesos de separación y divorcio: un enfoque positivo. Consecuencias de la familia. La custodia compartida. Una guía para el informe pericial psicológico. La justicia terapéutica: propuestas y experiencias.

Directores: Ilmo. Sr. D. José Pascual Ortuño Muñoz e Ilma. Sr. D.^a Francisca Fariña Rivera.

– Delincuencia económica: su investigación y enjuiciamiento.

Directores: Excmo. Sr. D. Alejandro Luzón Cánovas e Ilmo. Sr. D. José María de la Mata Amaya.

– Economía y contabilidad.

Director: Ilmo. Sr. D. Pedro Juez Martel.

– Operaciones fraudulentas cometidas a través de sociedades (*on line*).

Director: Ilmo. Sr. D. Pedro Juez Martel.

– Las plataformas de financiación participativa: la Ley 5/2015 de fomento de financiación empresarial. El *crowdfunding*.

Directores: Ilmo. Sr. D. Francisco José Pañeda Usunariz e Ilma. Sra. D.^a María Frieda San José Arango.

- Economía y contabilidad (2.^a sesión presencial).

Director: Ilmo. Sr. D. Pedro Juez Martel.

– Principales novedades introducidas por la Ley 36/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común y de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Directores: Ilmo. Sr. D. Joaquín María Vives de la Cortada Ferrer-Calbetó y Directora. Técnica D.^a María Luisa Roldan Garcia.

– Infancia y Justicia. Encuentro en colaboración con UNICEF, IUNDIA, la Fiscalía General del Estado y el Centro de Estudios Jurídicos.

Directores: Ilmo. Sr. D. Virgilio José María Labado e Ilmo. Sr. D. Javier Huete Nogueras.

7.3.1.9 *Cursos en colaboración Guardia Civil*

- Curso de medios tecnológicos de investigación.

7.3.1.10 *Estancias*

- Estancia en el Ministerio de Cultura.
- Estancia en el Instituto Nacional de Toxicología.
- Estancia en el Banco de España.
- Estancia en el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.
- Estancia en los laboratorios de la Policía Científica del Cuerpo Nacional de Policía.
- Estancia en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

7.3.1.11 *Escuela de Verano del Ministerio Fiscal*

En el marco del Convenio suscrito por la Fiscalía General del Estado con la Xunta de Galicia, la Diputación Provincial de A Coruña y el Centro de Estudios Jurídicos.

El primer curso en el mes de junio y segundo curso en septiembre.

Curso de Junio:

- Protección penal de la flora, la fauna y los animales domésticos: especial referencia al marisqueo ilegal

Director: Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Aladro Fernández, Fiscal Jefe de Pontevedra

Curso de septiembre:

– El Fiscal investigador presente y futuro

Directora: Ilma. Sra. D.^a Anabel Vargas Gallego

7.3.1.12 *Fundación Aequitas*

– Actualidad y futuro de la discapacidad

Directores: Ilmo. Sr. D. Carlos Ganzenmuller Roig e Ilmo. Sr. D. Federico Cabello de Alba Jurado.

7.3.1.13 *Fundación Manantial*

– La perspectiva social en el abordaje actual de la enfermedad mental.

7.3.1.14 *Otras colaboraciones institucionales*

– Cyberseguridad Summer BootCamp 2017 Extensiva. INCIBE

– Cyberseguridad Summer BootCamp 2017 Intensiva. INCIBE

– Proceso Penal: *Técnicas de investigación, prueba, y delitos* contra la Hacienda Pública

Directora: Ilma Sra. D.^a Carmen Launa Oriol Instituto de Estudios Fiscales (IEF)

7.3.2 FORMACIÓN ON LINE

FORMACIÓN EN LÍNEA 2017				
	Participantes	Hombres	Mujeres	% de mujeres sobre el total
Fiscales	264	103	161	60,98

N.º	Título	Coordinador / animador de foro	Fecha inicio	Fecha fin
1	La nueva ley de EUROJUST. Conflictos de Jurisdicción 1.ª edición.	Pérez Enciso, Pedro; Espina Ramos, Jorge Ángel; Gutiérrez Zarza, Ángeles; Jiménez-Villarejo Fernández, Francisco Moran Martínez, Rosa Ana,	24/04/17	30/07/17
2	La Responsabilidad Penal y la Protección Jurídica del Menor 4.ª edición.	García Ingelmo, Francisco Manuel; Ferreiros Marcos, Carlos Eloy,	23/10/17	28/02/18
3	Idiomas en Línea (Inglés, Francés, Alemán e Italiano).	Empresa,	12/06/17	30/01/18
4	Curso de Herramientas Ofimáticas (Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook) 2017,	Empresa,	29/05/17	07/11/17

7.3.3 FORMACIÓN INTERNACIONAL

7.3.3.1 Seminarios y talleres de trabajo internacionales

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON LA REFJ EN 2017

ACTIVIDADES RED EUROPEA DE FORMACIÓN JUDICIAL EN 2016 (PARTICIPACIÓN DE FISCALES ESPAÑOLES)

Tipo Actividad	N.º actividades	Participantes		
		F	M	Total
Catálogo avanzado	1	3	7	10
Catalogue plus	10	4	2	6
Derecho administrativo	1	1	0	1
Derecho civil	4	3	1	4
Derecho penal	10	13	6	19
Derechos humanos	2	4	4	8
Intercambios de corta duración	30	24	6	30
Intercambios de larga duración	3	1	2	3
Intercambios bilaterales	3	3	0	3
Proyecto lingüístico	10	17	10	27
Visitas de estudios	11	12	4	16

ACTIVIDADES RED EUROPEA DE FORMACIÓN JUDICIAL EN 2016
(PARTICIPACIÓN DE FISCALES ESPAÑOLES)

Tipo Actividad	N.º actividades	Participantes		
		F	M	Total
Total	85	85	42	127

Características de las actividades formativas con la REFJ en 2017:

- a) El CEJ participó en 85 actividades con la REFJ frente a 71 en 2016.
- b) Por número de participantes destacan los programas de intercambios de corta duración (22 % del total), las visitas de estudios (12 %) y las actividades relacionadas con el ámbito del derecho penal y lingüístico (20 %).
- c) La participación de las mujeres en la formación internacional sigue siendo ampliamente mayoritaria (67 % del total), 85 mujeres respecto del total de 127 participantes.

Programa de intercambios de corta y larga duración con la REFJ en 2017:

- a) Envío de 30 fiscales españoles a países extranjeros (intercambios activos de corta duración) y recepción de 14 fiscales extranjeros por el CEJ (intercambios pasivos de corta duración).
- b) Envío de fiscales españoles a países extranjeros (intercambios activos de larga duración): 1 fiscal a EUROJUST en La Haya, 1 fiscal al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo y 1 fiscal al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.
- c) En 2017 el CEJ participa por primera vez en el programa de intercambios bilaterales de una semana de duración con tres intercambios entre fiscalías de Castellón-Estonia, Madrid-Italia y Sevilla-Italia.

Asimismo, en 2017 el CEJ participó en 16 actividades de formación internacional en colaboración con otras instituciones europeas:

- 2 seminarios con la ENM francesa: Terrorism and fundamental rights. The investigation and intelligence gathering phase. Bruselas y Media treatment of terrorism cases. París.
- 11 seminarios independientes y 6 seminarios de convenio con la ERA.
- Colaboración con el Ministerio de Justicia y el CGPJ en un Curso de Cooperación Internacional al Desarrollo: ‘La participación en Proyectos Internacionales de Justicia’.

**FORMACIÓN PRESENCIAL EN IDIOMAS (INGLÉS Y FRANCÉS)
IMPARTIDA EN EL CEJ EN 2017**

Tipo de actividad	Fiscales
Inglés jurídico presencial	8
Francés jurídico presencial	6
Inmersión lingüística en inglés	9
Total	23

**DATOS DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
INTERNACIONAL EN 2017**

TOTAL FISCALES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INTERNACIONAL EN 2017 (DESGLOSE POR CARRERAS Y CUERPOS Y POR SEXO)				
Carrera o Cuerpo	Hombres	Mujeres	Total	% Mujeres
Carrera Fiscal	57	138	195	71 %

**EVOLUCIÓN PARTICIPACIÓN DE FISCALES EN ACTIVIDADES INTERNACIONALES
(2013-2017)**

Carrera o Cuerpo	2013	2014	2015	2016	2017	Variación porcentual 2017-2013
Carrera Fiscal	161	207	176	182	195	21 %

Al mismo tiempo un total de 279 jueces y fiscales europeos participaron del programa internacional tanto con carácter formativo como institucional en las instalaciones del CEJ en Madrid.

7.3.3.2 Actividad institucional relacionada con la formación internacional

Participación de fiscales de la Secretaría Técnica de la FGE en la representación del Centro de Estudios Jurídicos en los siguientes grupos de trabajo de la REFJ en 2017.

REUNIONES 2017 EN EL MARCO DE LA REFJ		
Reunión	Fecha	Lugar
Asamblea General.	22-23 de junio.	Malta.

REUNIONES 2017 EN EL MARCO DE LA REFJ		
Reunión	Fecha	Lugar
Subgrupo Lingüístico.	27 de abril.	Bruselas.
	5 septiembre.	Praga.
Subgrupo Derechos Humanos.	19 de junio.	Bruselas.
	17 de septiembre.	Bruselas.
Subgrupo Penal.	13-14 de marzo.	Bruselas.
	8 a 9 de octubre.	Cracovia.

7.4 Preparación de informes de anteproyectos de ley para el Consejo Fiscal

La Secretaría Técnica durante el año 2017 ha efectuado los trabajos preparatorios de los informes del Consejo Fiscal correspondientes a las modificaciones legislativas expresadas en el apartado 2.3 del presente capítulo.

7.5 Participación en comisiones y grupos de trabajo en representación de la Fiscalía General del Estado

Entre los cometidos de la Secretaría Técnica debe citarse la participación de los Fiscales que la integran en diversas comisiones o grupos de trabajo de la más diversa índole, en los que bien porque así se dispone legalmente, o en virtud de petición formulada por algún organismo o institución, se precisa la participación del Ministerio Fiscal. Así, la Secretaría Técnica ha participado en:

1. Comité Técnico de la Comisión Nacional de la Policía Judicial.
2. Grupo de asuntos jurisdiccionales de la Sección Española del Comité conjunto Hispano-Norteamericano.
3. Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.
4. Comisión de seguimiento del Protocolo a seguir en cumplimiento del artículo 12.3 del Reglamento (UE) N.º 996/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre investigación y prevención de accidentes aéreos.
5. Comisión Nacional para el uso del ADN.
6. Comisión de seguimiento y control del Acuerdo de Colaboración entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Fiscalía General del Estado para el desarrollo de actuaciones en el ámbito del servicio de información a afectados por una posible sustracción de recién nacidos.
7. Observatorio sobre el Delito Fiscal.